

**CONTESTACIÓN 2023-260**

Iveth Zuleidy Valencia Montealegre <ZuleidyValenciaAbogada@outlook.es>

Lun 15/01/2024 10:35 AM

Para: Juzgado 05 Laboral Circuito - Tolima - Ibagué <j05lctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Raul Eduardo Varon Ospina <revaron@procuraduria.gov.co>; luis gomez <luisgoto1@yahoo.com>; mjaimes@godoycordoba.com <mjaimes@godoycordoba.com>; nsierra@realcontract.com.co <nsierra@realcontract.com.co>

 1 archivos adjuntos (316 KB)

CONTESTACIÓN 2023-260.pdf;

Doctores:

**JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO**

**IBAGUÉ – TOLIMA**

E.S.D.

**REF.:**

**PROCESO:** ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

**RADICACIÓN:** 73001310500520230026000

**DEMANDANTE:** MARIA CLAUDIA RUIZ DURAN

**DEMANDADOS:** ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES

**ASUNTO:** CONTESTACIÓN DEMANDA

**IVETH ZULEIDY VALENCIA MONTEALEGRE, abogada en ejercicio, vecina de Ibagué-Tolima, identificada con C.C. No. 1.110.571.948 de Ibagué, y portadora de la T.P. 339748 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada sustituta de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en los términos conferidos mediante poder allegado a su distinguido Despacho; comedidamente permito remitir el documento en formato (PDF) los siguientes documentos:**

**1. CONTESTACIÓN Y ANEXOS**

 [CC-51853052.rar](#)

**Atentamente,**

IVETH ZULEIDY VALENCIA MONTEALEGRE

Abogada

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

Fecha: 15 de enero de 2023

**JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO**  
**Cra 2 No 8-90**  
**Ibagué-Tolima**

Asunto: CONTESTACIÓN DE DEMANDA  
Tipo de proceso: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA  
Radicado No: 73001310500520230026000  
Demandante: MARÍA CLAUDIA RUIZ DURAN  
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES Y OTROS

**IVETH ZULEIDY VALENCIA MONTEAEGRE**, abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderada externa de la Administradora Colombiana de Pensiones - en adelante COLPENSIONES -, cordialmente solicito al Despacho reconocerme personería para actuar de acuerdo al poder adjunto y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda propuesta dentro del proceso de la referencia instaurado contra mi representada, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la demandante

## **I. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO**

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificatorio del artículo 48 de la constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle. La representación legal la ejerce el Doctor MAURICIO OLIVERA GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 79.481.221 quien obra en su calidad de Presidente según consta en el Acuerdo No. 0054 del 12 de Agosto de 2013 y Acta de Posesión No. 1279 del 16 de agosto de 2013. El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, número telefónico 2170100

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

### II. A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Nos oponemos a todas y a cada una de las pretensiones por las cuales propende la parte accionante ya que ellas carecen de asidero no solo Jurídico sino fáctico, afirmaciones que quedarán plenamente probadas dentro del desarrollo del proceso que aquí ocupa nuestra atención y por lo tanto nos referiremos a cada una de ellas así:

**A LA PRIMERA:** Nos oponemos, a que se declare la ineficacia del traslado de la señora MARÍA CLAUDIA RUIZ DURAN, al respecto es necesario indicar que el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 2 de la Ley 797 de 2003 reza: “los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran”. En ese sentido se entiende que los afiliados son libres de escoger el régimen pensional a la cual deseen afiliarse, hecho este que sucedió en el presente asunto, puesto que el demandante por su propia voluntad decidió trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), no siendo viable la solicitud elevada en la pretensión.

**A LA SEGUNDA:** Nos oponemos a esta pretensión, debido a las razones jurídicas expuestas en la pretensión primera, lo cual es nutrida por el legislador, en cuanto este tuvo a bien establecer una serie de limitaciones que, como lo analizó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004, son medidas adecuadas y tienen un objetivo acorde con la Constitución, pues pretenden mantener el sistema pensional capitalizado y viable económicamente.

Así las cosas, entre las limitantes impuestas, se estableció la prohibición total al traslado entre regímenes pensionales para cierto grupo de afiliados, con base en la siguiente aseveración: “*después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*”, tema sobre el cual se pronunció Corte Constitucional en sentencia C – 1024 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la que adujo: “*La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.*”

Atendiendo a lo previamente expuesto y de conformidad con la documentación aportada junto con el libelo de la demanda, se advierte que la demandante se encuentra dentro de la segunda limitante, esto es, cito,

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

“de aquellos afiliados a los que le faltaren 10 o menos años para adquirir el derecho a la pensión de vejez”; no resultando por consiguiente ni legal ni conducente el traslado de régimen pensional hoy incoado.

**A LA TERCERA:** Nos oponemos a que ordene a PORVENIR S.A., trasladar todos los aportes y rendimiento que la demandante ostenta en su cuenta de ahorro individual debido a las razones jurídicas expuestas en la pretensión primera, lo cual es nutrido por el legislador, en cuanto este tuvo a bien establecer una serie de limitaciones que, como lo analizó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004, son medidas adecuadas y tienen un objetivo acorde con la Constitución, pues pretenden mantener el sistema pensional capitalizado y viable económicamente, teniendo igualmente en especial consideración que la declaración injustificada de ineficacia del traslado de un afiliado del RPM a RAIS afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

Sí lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia T- 489 de 2010, al expresar: (...) *la Sala se permite destacar dos ideas, relacionadas ambas con la sostenibilidad económica del sistema pensional. Ellas son: a-- La primera tiene que ver con la protección del capital pensional. No se puede permitir “la descapitalización del fondo”, si personas que no contribuyeron a su formación, vienen a último momento, cuando les faltan ya menos de 10 años para concretar su pensión de vejez, a beneficiarse de un ahorro comunitario accediendo a una pensión, cuyo pago desfinancia el sistema. b- En segundo término, desde una perspectiva social se contraría la equidad y se abandona el valor de la justicia material, al permitir a personas que no han contribuido a los rendimientos de los fondos pensionales, entren a beneficiarse y a subsidiarse a costa de las cotizaciones y los riesgos asumidos por otras y no por ellas mismas*” Así las cosas el principio de sostenibilidad financiera representa la garantía del derecho fundamental a la pensión de los Colombianos de manera sostenida e indefinida y la posición asumida por la Corte en los fallos relacionados con nulidad o inexistencia del traslado entre regímenes pensionales, quebranta el principio de sostenibilidad financiera, en tanto genera una situación caótica que desvertebra la debida planeación en la asignación y distribución de los recursos del Sistema Pensional, al desconocer la irreductible necesidad de que dichas condenas se cumplan previa la ordenada gestión de los recursos que en la mayoría de los casos no están presupuestados en la medida en que surgen, de manera contingente de la declaración.

**A LA CUARTA:** Nos oponemos a que se declare que la señora MARIA CLAUDIA RUIZ DURAN, siempre ha pertenecido al RPM administrado hoy por COLPENSIONES, debido a las razones jurídicas expuestas en la pretensión primera, lo cual es nutrido por el legislador, en cuanto este tuvo a bien establecer una serie de limitaciones que, como lo analizó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004, son medidas adecuadas y tienen un objetivo acorde con la Constitución, pues pretenden mantener el sistema pensional capitalizado y viable económicamente.

Así las cosas, entre las limitantes impuestas, se estableció la prohibición total al traslado entre regímenes pensionales para cierto grupo de afiliados, con base en la siguiente aseveración: *“después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años*

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

*o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”, tema sobre el cual se pronunció Corte Constitucional en sentencia C – 1024 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la que adujo: “La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.”*

Atendiendo a lo previamente expuesto y de conformidad con la documentación aportada junto con el libelo de la demanda, se advierte que la demandante se encuentra dentro de la segunda limitante, esto es, cito, “de aquellos afiliados a los que le faltaren 10 o menos años para adquirir el derecho a la pensión de vejez”; no resultando por consiguiente ni legal ni conducente el traslado de régimen pensional hoy incoado.

**A LA QUINTA:** Nos oponemos a que se ordene a COLPENSIONES a recibir a la señora MARÍA CLAUDIA RUIZ DURAN, debido a las razones jurídicas expuestas en la pretensión primera, lo cual es nutrida por el legislador, en cuanto este tuvo a bien establecer una serie de limitaciones que, como lo analizó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004, son medidas adecuadas y tienen un objetivo acorde con la Constitución, pues pretenden mantener el sistema pensional capitalizado y viable económicamente.

Así las cosas, entre las limitantes impuestas, se estableció la prohibición total al traslado entre regímenes pensionales para cierto grupo de afiliados, con base en la siguiente aseveración: “después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”, tema sobre el cual se pronunció Corte Constitucional en sentencia C – 1024 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la que adujo: “La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.”

Atendiendo a lo previamente expuesto y de conformidad con la documentación aportada junto con el libelo de la demanda, se advierte que la demandante se encuentra dentro de la segunda limitante, esto es, cito, Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

“de aquellos afiliados a los que le faltaren 10 o menos años para adquirir el derecho a la pensión de vejez”; no resultando por consiguiente ni legal ni conducente el traslado de régimen pensional hoy incoado.

**A LA SEXTA:** Nos oponemos a esta pretensión, debido a las razones jurídicas expuestas en la pretensión primera, lo cual es nutrido por el legislador, en cuanto este tuvo a bien establecer una serie de limitaciones que, como lo analizó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004, son medidas adecuadas y tienen un objetivo acorde con la Constitución, pues pretenden mantener el sistema pensional capitalizado y viable económicamente.

Así las cosas, entre las limitantes impuestas, se estableció la prohibición total al traslado entre regímenes pensionales para cierto grupo de afiliados, con base en la siguiente aseveración: *“después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”*, tema sobre el cual se pronunció Corte Constitucional en sentencia C – 1024 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la que adujo: *“La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.”*

Atendiendo a lo previamente expuesto y de conformidad con la documentación aportada junto con el libelo de la demanda, se advierte que la demandante se encuentra dentro de la segunda limitante, esto es, cito, “de aquellos afiliados a los que le faltaren 10 o menos años para adquirir el derecho a la pensión de vejez”; no resultando por consiguiente ni legal ni conducente el traslado de régimen pensional hoy incoado.

**A LA SEPTIMA:** Nos oponemos, a que se actualice a la historia laboral de la demandante, por cuando ha venido cotizando en el fondo privado, debido a las razones jurídicas expuestas en la pretensión primera, lo cual es nutrido por el legislador, en cuanto este tuvo a bien establecer una serie de limitaciones que, como lo analizó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004, son medidas adecuadas y tienen un objetivo acorde con la Constitución, pues pretenden mantener el sistema pensional capitalizado y viable económicamente.

Así las cosas, entre las limitantes impuestas, se estableció la prohibición total al traslado entre regímenes pensionales para cierto grupo de afiliados, con base en la siguiente aseveración: *“después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”*, tema sobre el cual se pronunció

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8



# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

Corte Constitucional en sentencia C – 1024 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la que adujo: *“La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.”*

Atendiendo a lo previamente expuesto y de conformidad con la documentación aportada junto con el libelo de la demanda, se advierte que la demandante se encuentra dentro de la segunda limitante, esto es, cito, “de aquellos afiliados a los que le faltaren 10 o menos años para adquirir el derecho a la pensión de vejez”; no resultando por consiguiente ni legal ni conducente el traslado de régimen pensional hoy incoado.

**A LA OCTAVA:** Nos oponemos, teniendo en cuenta que las costas procesales son las erogaciones económicas en que incurre una parte a lo largo del proceso en aras de sacar adelante la posición que detenta en el juicio. El Consejo de Estado en su sección segunda considera que las costas procesales se representan en los gastos ordinarios, las cauciones, el pago de los honorarios a los peritos, los gastos de publicaciones, los viáticos, entre otros, y encuadran en lo que se denomina expensas. Así mismo, comprenden en esta noción los honorarios del abogado, que en el aspecto jurídico son las agencias en derecho.

Dichos aspectos que conducen a una condena en costas, esto es la conducta de las partes, deben estar causadas y comprobadas, siendo consonantes con el artículo 365 del Código General del Proceso, descartándose así una apreciación objetiva que simplemente refiera quien resulte vencido para que le sean impuestas, consideración que mantuvo el ad-quo al imponerla, puesto que dentro del procedimiento no se advierte temeridad o mala conducta por parte de mí representada en los términos previstos del Art. 79 del C.G.P, no hay lugar a que en tal caso se imponga dicha condena..

### III. A LOS HECHOS

**PRIMERO:** No es un hecho, es una apreciación normativa de la parte demandante

**SEGUNDO:** No es un hecho, es una apreciación normativa de la parte demandante

**TERCERO:** Es cierto, conforme a la historia laboral del 13 de diciembre de 2023, se evidencia que la fecha de afiliación de la demandante es el 17 de mayo de 1988.

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

**CUARTO:** No es cierto, conforme a la historia laboral del 13 de diciembre de 2023, la señora MARÍA CLAUDIA RUIZ DURAN, tiene 365.14 semanas cotizadas en el RPM.

**QUINTO:** Es cierto, conforme a la historia laboral del 13 de diciembre de 2023.

**SEXTO:** No nos consta el tipo de información y por ende nos atenemos a lo efectivamente acreditado dentro del presente proceso.

**SÉPTIMO:** No nos consta el tipo de información por ende nos atenemos a lo efectivamente acreditado dentro del presente proceso.

**OCTAVO:** No nos consta el tipo de información que se brindó a la demandante por el asesor del fondo privado, y por ende nos atenemos a lo efectivamente acreditado dentro del presente proceso.

**NOVENO:** No nos consta el tipo de información que se brindó a la demandante por el asesor del fondo privado, y por ende nos atenemos a lo efectivamente acreditado dentro del presente proceso.

**DÉCIMO:** No nos consta el tipo de información que se brindó a la demandante por el asesor del fondo privado, y por ende nos atenemos a lo efectivamente acreditado dentro del presente proceso.

**DÉCIMO PRIMERO:** No nos consta el tipo de información que se brindó a la demandante por el asesor del fondo privado, y por ende nos atenemos a lo efectivamente acreditado dentro del presente proceso.

**DÉCIMO SEGUNDO:** No nos consta el tipo de información que se brindó a la demandante por el asesor del fondo privado, y por ende nos atenemos a lo efectivamente acreditado dentro del presente proceso.

**DÉCIMO TERCERO:** No nos consta el tipo de información que se brindó a la demandante por el asesor del fondo privado, y por ende nos atenemos a lo efectivamente acreditado dentro del presente proceso.

**DÉCIMO CUARTO:** No nos consta el tipo de información que se brindó a la demandante por el asesor del fondo privado, y por ende nos atenemos a lo efectivamente acreditado dentro del presente proceso.

**DÉCIMO QUINTO:** No nos consta el tipo de información que se brindó a la demandante por el asesor del fondo privado, y por ende nos atenemos a lo efectivamente acreditado dentro del presente proceso.

**DÉCIMO SEXTO:** Es cierto, la demandante presento solicitud de afiliación a Colpensiones el 23 de mayo de 2023.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Es cierto, COLPENSIONES rechazó la afiliación niega conforme a que le falta 10 años para cumplir sus edad para pensionarse.

**DÉCIMO OCTAVO:** No nos consta el tipo de información por ende nos atenemos a lo efectivamente acreditado dentro del presente proceso.

**DÉCIMO NOVENO:** No nos consta el tipo de información por ende nos atenemos a lo efectivamente acreditado dentro del presente proceso.

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8



# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

**VIGÉSIMO:** No nos consta el tipo de información por ende nos atenemos a lo efectivamente acreditado dentro del presente proceso.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Es cierto, conforme a la documentación aportada.

### IV. RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Tomando en consideración las pretensiones incoadas en la demanda se procede a determinarse le asiste razón a la demandante MARÍA CLAUDIA RUIZ DURAN cuando pretende trasladarse del Sistema de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, en tal sentido resulta prudente recordar como el Artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 2 de la Ley 797 de 2003 indica que:

“los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran”.

Este derecho a la libre escogencia ha sido destacado por la Corte Constitucional como integrante directo del derecho constitucional a la Seguridad Social, pues en virtud de este se accede en forma libre y voluntaria al sistema pensional. Pero una vez se ha accedido al sistema pensional en aplicación del derecho a la libre escogencia, para movilizarse dentro del mismo, el legislador tuvo a bien establecer una serie de limitaciones que, como lo analizó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004, son medidas adecuadas y tienen un objetivo acorde con la Constitución, habida cuenta que pretenden mantener el sistema pensional capitalizado y viable económicamente.

Esas limitaciones están establecidas en los apartes siguientes de la norma mencionada, donde prevé que:

“una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial”.

De esta manera la norma dispone un límite temporal o período de permanencia mínimo en cada régimen, lapso dentro del cual no podrá haber traslado entre el sistema de ahorro individual y el de prima media y viceversa. Constituye ésta la primera limitación establecida por el legislador al ejercicio del derecho a la libre escogencia.

Por lo que se estableció una limitación o prohibición total al traslado entre regímenes pensionales para cierto grupo de afiliados, pues se determinó que “después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”, tema sobre el cual se pronunció Corte Constitucional en sentencia C – 1024 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la que adujo:

“La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna”.

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

Ello en atención al pronunciamiento dentro de la providencia emitida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral MP ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA SL3752-2020 Radicación n.º 73532 Acta 034, en la que preciso:

“En ese orden de ideas, es dable concluir que, aun cuando no haya certeza de si el afiliado recibió al momento de su traslado toda la información requerida, existen otros mecanismos que permiten colegir que la persona tenía vocación de permanecer en el régimen y que contaba con todos los elementos para forjar con plena convicción su elección.

Dichos comportamientos o actos de relacionamiento, en los casos de afiliación, pueden verse traducidos en acciones concretas de los afiliados tales como presentar solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, entre otros. Así lo ha establecido esta Corporación en el fallo CSJ SL413- 2018, en donde dijo que,

Por esta misma razón, en casos como el presente, donde se discute la materialización del acto jurídico de la afiliación o traslado, es relevante tener en cuenta los aportes al sistema, no como un requisito ad substantiam actus de la afiliación, como lo sostuvo el Tribunal, sino como una señal nítida de la voluntad del trabajador cuando existen dudas razonables sobre su genuino deseo de cambiarse de régimen.

Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes de información de Radicación n.º 73532 SCLAJPT-10 V.00 34 saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado.

A partir de lo expuesto en precedente, se tiene que los traslados horizontales dentro del Régimen de Ahorro Individual, es decir los cambios entre administradoras de fondos privados de pensiones, reúnen los elementos propios de unos actos de relacionamiento, lo cual permite suponer que el afiliado desea continuar en dicho régimen, aunque bajo la asesoría y beneficios que le pueda proveer otra administradora de pensiones, las cuales compiten entre sí.

Incluso, tales actuaciones presuponen cierto conocimiento de la persona respecto al funcionamiento del régimen, sus beneficios y desventajas y su modo de operar, de ahí que su intención sea firme en continuar aun teniendo la posibilidad eventual de retornar a Colpensiones.”.

Así mismo, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

Así mismo, el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin constitucional válido, pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos pensionales en ambos regímenes, cuando se aproxima la edad para obtener el reconocimiento del derecho irrenunciable a la pensión, en beneficio de la estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional, de modo que tal prohibición de traslado debe ser entendida como una medida que ampara el interés general y el financiamiento del sistema de pensiones.

Al respecto, frente a la prohibición de trasladarse de régimen cuando a la persona le faltaren menos de 10 años para adquirir la edad mínima para pensionarse “Se mantiene el principio de libre selección de régimen consagrado en la Ley 100 de 1993 pero se le adicionan dos condiciones que permiten darle más estabilidad y sostenibilidad al sistema pensional. En primer lugar, se amplía el plazo para el cambio entre regímenes a una vez cada cinco años, y, en segundo lugar, se limita este ejercicio de traslado en el tiempo, al no permitirlo durante los últimos diez años que le falten al afiliado para cumplir la edad exigida en el régimen de prima media para tener derecho a la pensión de vejez. En todo caso se prevé una disposición transitoria para quienes ya se encuentran en esta situación”.

Fue voluntad del legislador la de limitar el traslado de un régimen a otro para aquellas personas a quienes les faltare menos de 10 años para cumplir con la edad mínima exigida para pensionarse, limitante que se funda en la necesidad de procurar la sostenibilidad del sistema y evitar que quienes no han contribuido a la capitalización de los fondos pensionales, se beneficien del riesgo en que otros han incurrido, aspecto sobre el cual la Corte Constitucional en sentencia C – 1024 de 2004, precisó: “La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resultará razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pudiese aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.”

Por otro lado, es dable en esta oportunidad hacer mención respecto al principio legal de la relatividad jurídica o de los contratos, en virtud del cual Colpensiones es un tercero frente al negocio o vínculo contractual contraído entre la parte demandante y las Administradoras de Fondos Pensionales de carácter privado, por lo que, tal acto jurídico solo tiene efectos inter partes y con ello, independientemente de la decisión adoptada por el juez, Colpensiones no puede ser favorecida ni perjudicada con la decisión adoptada. Igualmente, frente al caso que nos atañe, ha de hacerse hincapié frente al agravio injustificado que padecería el equilibrio financiero del Sistema Pensional de ser procedente la nulidad de traslado y la obligatoriedad para Colpensiones de recibir al afiliado y sus aportes.

Esto tiene su fundamento además de lo legal, un aspecto jurisprudencial que no se vislumbra en la mayoría de las sentencias, pero que magistrados de altas cortes se apartan de las decisiones tomadas y aclaran lo siguiente:

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

El doctor JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ magistrado del tribunal superior del distrito judicial de Pereira (Risaralda) en proceso bajo la radicación 66001-31-05-004-2017-00413-01 cuyas demandadas son las mismas de este actual proceso (Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES y Porvenir S.A.) en una aclaración de voto precipito que existe una IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE IMPONER RESPONSABILIDAD A COLPENSIONES, apartes que quisiera traer en este momento:

Indica el doctor Salazar que la ley 100 de 1993 creo una dualidad de sistemas pensionales y permitió el traslado de los afiliados entre ellos, de allí que COLPENSIONES no tenía dentro de sus posibilidades retener a los afiliados que desearan cambiarse al nuevo régimen creado.

Además, plantea La pregunta que deben hacerse los administradores de justicia frente a esta situación y la cual literalmente lo traigo a colación:

¿Contempla nuestro sistema legal que se pueda imponer a una persona una carga económica por un daño antijurídico o un perjuicio que otro causó y frente al cual no tuvo ninguna posibilidad de evitarlo?

Y en ese mismo sentido el doctor Salazar dio una respuesta y que nuevamente la cito de la siguiente manera:

No es posible, por cuanto NO hay ninguna disposición que imponga tal carga. De allí que, no puede pretenderse que COLPENSIONES, sin haber tenido responsabilidad ni incidencia alguna en el traslado, asuma el pago de una pensión superior a la que puede otorgarse con el dinero existente en la cuenta de ahorro individual.

Obligar a este Fondo a asumir tal carga es defraudar los intereses de las personas que legítimamente lo han conformado con sus aportes. De allí que, desde el principio esa pretensión está llamada al fracaso por inexistencia de disposición que permita tal desafuero.

Cosa diferente es que, si se prueba en el proceso el engaño o la responsabilidad de la AFP privada en el traslado del afiliado y, como consecuencia de ello, la acusación de un perjuicio a este, él pueda pedir la indemnización de ese perjuicio, pero a cargo de quien se lo causó, esto es la AFP, más no COLPENSIONES.

Ello significa en mi interpretación de las anteriores citas que el planteamiento por esta aclaración de voto en dicha sentencia, sustentada en otras decisión judiciales de la misma línea, permite aseverar que el obligado a subsanar los yerros generados por un perjuicio que exclusivamente genero los fondos privados, son estos mismos, a modo de sanción en el sentido que sean estos que acaten la orden judicial de pensionar a la demandante en la cuantía que merecen adecuadamente, sin mermar sus derechos a la seguridad social; siendo COLPENSIONES ajenos a cualquier obligación, ya que de catalogarle a la entidad que presentamos culpable genera una carga que afecta la sostenibilidad financiera del sistema pensional que preceptúa el artículo 48 de la constitución política.

Es esa postura anterior, la que permite aseverar la no ocurrencia o asignación de consolidar la LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA en el presente litigio, por cuanto las pretensiones van

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

incoadas a establecer un vicio del consentimiento que genere EL FONDO PRIVADO, sin tener Colpensiones asignación de responsabilidad alguna en la controversia planteada y lo cual permite darle trascendencia a teorías jurisprudenciales que en síntesis permite conceptualizarlo en la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado.

De esa aseveración deben extraerse elementos cualitativos que permitan la demostración de la subrogación de una legitimación en la causa por pasiva, lo cual para el caso no hace merecedor a COLPENSIONES de dicha asignación, por cuanto el derecho o vicio reclamado recae exclusivamente en el FONDO PRIVADO y es este solamente quien debe subsanarlo o satisfacer el adecuado restablecimiento del derecho violentado, DEJANDO POR FUERA DE TODA LA RELACION JURIDICA ORIGINADA PRINCIPALMENTE POR EL LITIGIO PLANTEADO a COLPENSIONES que nada tiene que ver con el vicio del consentimiento planteado por la parte actora.

Aunado a todo lo anterior se debe de exponer que existe un desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, por cuanto el art. 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, señala que:

“El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.”

Teniendo en cuenta el artículo citado se logra establecer dos dimensiones de la seguridad social;

- Como un derecho constitucional fundamental.
- Servicio público de carácter obligatorio el cual se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en aras a la materialización de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, entre otros.

Igualmente es prudente señalar que el artículo 334 de la Constitución Política, establece que:

“La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”

Es decir que es necesario dar prevalencia al interés general sobre el particular y adoptar las medidas pertinentes en búsqueda de la protección de los recursos que soportan el sistema pensional, conforme a los principios que rigen la Constitución Política, en la medida que el derecho a la seguridad social se encuentra atado al principio de sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera del Estado. En conclusión, la declaración injustificada de ineficacia del traslado de un afiliado del RAIS al RPM afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

**Así las cosas, en el presente caso se determina que las pretensiones propuestas por la demandante MARÍA CLAUDIA RUIZ DURAN no están llamadas a prosperar, por cuanto puede evidenciarse**

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

dentro de las pruebas que reposan en el expediente que no cumple con los requisitos que se exigen para efectuar dicho traslado, habida cuenta que, a la fecha de presentar la reclamación administrativa, es decir, 23 de mayo de 2023, la parte actora ostentaba la edad de 57 años, 0 meses y 4 días. Por lo que superaba la edad de pensión, la cual no le corresponde a COLPENSIONES asignarla por cuanto sus semanas fueron cotizadas al fondo privado.

Lo anterior teniendo en cuenta que la MARÍA CLAUDIA RUIZ DURAN nació el 19 de mayo de 1966

En tal sentido, aduce la norma que la edad para adquirir el status pensional para las mujeres es de 57 años, con lo cual, y comparándolo con la presentación de la reclamación administrativa (el 31 de agosto de 2023) la demandante se encontraba inmerso en la prohibición legal que no permite el traslado entre regímenes dentro de los 10 años anteriores para el cumplimiento de la edad para ser beneficiario de la prestación pensional por vejez al que se encuentra cotizando al RAIS, haciéndolo, acreedor de la imposibilidad legal para el respectivo traslado, ya que ostentaba la edad de 57 años, 0 meses y 4 días

Ahora bien, desatado lo anterior queda inconcluso lo relacionado con el deber de información, para lo cual se propone la siguiente excepción que tiene trascendencia para debatir al interior del comité de conciliación:

INDEBIDA APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN MATERIA DE ASESORÍA DE TRASLADO PENSIONAL. Se ha evidenciado que, en los fallos relacionados con la nulidad o ineficacia de traslado entre regímenes pensionales, se censura que la administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, no proporcionó al afiliado una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las implicaciones del traslado, desconociendo que el deber de información que tienen las administradoras de pensiones ha tenido varias etapas:

- 1) Primera Etapa: el Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, estableció en el numeral 1. ° del artículo 97, la obligación de las entidades de “suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado”.
- 2) Segunda etapa: La ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, reglamentaron los derechos de los consumidores (precisando los principios y el contenido básico de la información) y establecieron el deber de asesoría y buen consejo a cargo de las administradoras de pensiones.
- 3) Tercera etapa: la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa N.° 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera, establecieron que los usuarios del sistema pensional tienen el derecho a la doble asesoría, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes, esto es, a obtener información de asesores y promotores de ambos regímenes, con el fin de que se formen un juicio imparcial y objetivo sobre las características, fortalezas y debilidades de cada uno, así como de las condiciones y efectos jurídicos del traslado.

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8



# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

Así las cosas, el análisis de la información suministrada por la AFP y el alcance de la asesoría que debió brindar al momento de la afiliación, deben ser valoradas bajo la normatividad vigente para la fecha de suscripción del formulario o de la materialización del traslado;

No es razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen, pues tal exigencia desvirtúa el principio de confianza legítima, teniendo en cuenta que el principio de legalidad y el debido proceso, no consisten solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se juzga.

El juzgamiento de la conducta de los fondos con base en normas inexistentes no tiene justificación jurídica alguna y viola gravemente el debido proceso de Colpensiones, quien sin haber participado en el trámite de traslado es quien debe afrontar la carga de la prestación.

Para ir cerrando estas consideraciones es necesario traer a colación también la figura jurídica de la Inoponibilidad por ser Colpensiones un tercero de buena fe, entendida la inoponibilidad (mecanismo protector), como la ineficacia de un acto o la ineficacia de una nulidad frente a terceros. Es decir, que la ineficacia o nulidad, resultaría inoponible frente a terceros de buena fe como en este caso Colpensiones, a la par que la figura de la inoponibilidad constituye un mecanismo protector del derecho a la seguridad jurídica, que en el caso de Colpensiones se consolida por el tiempo en que aquellos afiliados permanecieron en el RAIS, aunado a que la seguridad jurídica que se deriva de la inoponibilidad pretende proteger intereses patrimoniales de terceros, que en este caso, tienen alcance frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional.

De la misma manera, la Sala de Casación Civil, ha definido la inoponibilidad como aquella que “valora la confianza razonable de los terceros de buena fe en aquellos negocios que se presentan objetivamente como válidamente celebrados”, raciocinio, que a su vez se Deriva del principio de relatividad de los negocios jurídicos, es decir, que solo se producen efectos respecto de quienes voluntariamente participan de aquél.

Precisamente, la jurisprudencia en la especialidad civil, indica que la inoponibilidad no requiere de la validez del negocio jurídico, muy por el contrario, algo que es ineficaz entre las partes (como en este caso la afiliación al RAIS), si se tenga como eficaz frente al tercero de buena fe (en este caso Colpensiones). Así se ha dicho que: “cuyo caso no le interesa que no lo alcancen los efectos de un negocio válido e incontrovertible entre las partes, sino todo lo contrario, esto es que se tenga como válido frente a su calidad de tercero un negocio jurídico que carece de eficacia entre los celebrantes”. Es decir, que la Inoponibilidad en este caso frente a un negocio jurídico ineficaz, permite que sus efectos se mantengan ante un tercero de buena fe, o en otras palabras para el caso concreto, que se mantengan los efectos de la afiliación al RAIS frente a Colpensiones, para lo cual, se probará el desmedro patrimonial que sufre la reserva pensional del RPM en caso de resultarle oponible la ineficacia de los traslados irregulares al RAIS.

Por todo lo aquí analizado y atendiendo lo establecido en el Artículo 167 del Código General del Proceso,

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

se tiene que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, motivo por el cual la parte actora tenía el deber procesal de cómo mínimo, desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos que hoy demanda, so pena de que se presuma que los mismos fueron emitidos conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico y en consecuencia, goce de validez; como en efecto acontece dentro del caso hoy objeto de análisis y más cuando se ve una indebida aplicación de las normas en materia de asesoría de traslado pensional, cuando La carga dinámica de la prueba no puede ser aplicada en forma genérica, sin ninguna ponderación, y en desigualdad de las partes involucradas en un proceso, se hace una Errónea interpretación e indebida aplicación del artículo 1604 del Código Civil y demás interpretaciones que deben considerarse en instancia judicial.

### V. EXCEPCIONES

Me opongo Señor Juez a todas y cada una de las pretensiones por las cuales propende la parte actora y consecuencialmente presento las siguientes excepciones

#### **AUSENCIA DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA EFECTUAR TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.**

Dentro del sistema de seguridad social en pensiones opera el derecho a la libre escogencia de régimen pensional, con dos limitaciones precisas, la primera, consistente en un período mínimo de permanencia de 5 años; y la segunda, evitando el traslado de aquellos afiliados a los que le faltaren 10 o menos años para adquirir el derecho a la pensión de vejez, después de un año de vigencia de la Ley 797 de 2003.

Atendiendo a lo previamente expuesto, de conformidad con la documentación aportada junto con el libelo de la demanda, se advierte que la demandante se encuentra dentro de la segunda limitante, toda vez que a la fecha de radicación de la demanda cuenta con 54 años de edad cumplidos, no resultando por consiguiente ni legal ni conducente el traslado de régimen pensional hoy incoado.

**LA INOPONIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LA AFP ANTE COLPENSIONES, EN CASOS DE INEFICACIA DE TRASLADO DE RÉGIMEN.** Entendida la inoponibilidad (mecanismo protector), como la ineficacia de un acto o la ineficacia de una nulidad frente a terceros. Es decir, que la ineficacia o nulidad, resultaría inoponible frente a terceros de buena fe como en este caso Colpensiones, a la par que la figura de la inoponibilidad constituye un mecanismo protector del derecho a la seguridad jurídica, que en el caso de Colpensiones se consolida por el tiempo en que aquellos afiliados permanecieron en el RAIS, aunado a que la seguridad jurídica que se deriva de la inoponibilidad pretende proteger intereses patrimoniales de terceros, que en este caso, tienen alcance frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional.

De la misma manera, la Sala de Casación Civil, ha definido la inoponibilidad como aquella que “*valora la confianza razonable de los terceros de buena fe en aquellos negocios que se presentan objetivamente como válidamente celebrados*”, *raciocinio, que a su vez se deriva del principio de relatividad de los negocios jurídicos, es decir, que solo se producen efectos respecto de quienes voluntariamente participan de aquél.*”

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

Precisamente, la jurisprudencia en la especialidad civil, indica que la inoponibilidad no requiere de la validez del negocio jurídico, muy por el contrario, algo que es ineficaz entre las partes (como en este caso la afiliación al RAIS), si se tenga como eficaz frente al tercero de buena fe (en este caso Colpensiones). Así se ha dicho que: *“cuyo caso no le interesa que no lo alcancen los efectos de un negocio válido e incontrovertible entre las partes, sino todo lo contrario, esto es que se tenga como válido frente a su calidad de tercero un negocio jurídico que carece de eficacia entre los celebrantes”*. Es decir, que la inoponibilidad en este caso frente a un negocio jurídico ineficaz, permite que sus efectos se mantengan ante un tercero de buena fe, o en otras palabras para el caso concreto, que se mantengan los efectos de la afiliación al RAIS frente a Colpensiones, para lo cual, se probará el desmedro patrimonial que sufre la reserva pensional del RPM en caso de resultarle oponible la ineficacia de los traslados irregulares al RAIS.

**RESPONSABILIDAD SUI GENERIS DE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.** Las entidades de Seguridad Social no solo se sujetan a la responsabilidad propia de los contratos de aseguramiento, sino que se ciñen a obligaciones de índole constitucional que trascienden como administradoras de un servicio público de seguridad social. En este caso, la responsabilidad de las AFP por la ineficacia de un traslado, no sólo se deben enmarcar a reparar el daño individualmente sometido a consideración de un Juez, sino que debe tener alcance frente a los daños indirectos que irradian o comprometen los derechos constitucionales de terceros, en razón de la reserva patrimonial de los pensionados y afiliados del RPM que se ven comprometidos con el desmedro que sufre la reserva pensional, y que si bien es cierto, la jurisprudencia ha indicado que al afiliado no le es atribuible y por ende no se le exige la equivalencia económica de los aportes que se devuelven del RAIS al RPM, no es menos cierto, que tal reparo económico lo debe asumir quien ha causado el daño y por virtud de la operancia de la inoponibilidad.

**JUICIO DE PROPORCIONALIDAD Y PONDERACIÓN.** Toda vez que la decisión judicial de declarar la ineficacia de traslado, repercute, en que se crea de manera injustificada y desproporcionada una obligación (con efectos patrimoniales) en cabeza de Colpensiones, quien administra los aportes de miles de pensionados y afiliados, y dicha medida para restablecer los derechos del afiliado, no pasaría el segundo criterio de la *“necesidad”*, toda vez que si existen otros medios menos lesivos para mantener los derechos del afiliado, y es que quien se deba hacer cargo de las prestaciones económicas que se deriven de la ineficacia sea la AFP, quien ha administrado dichos recursos y ha generado los respectivos rendimientos, así mismo, al ponderar los bienes jurídicos en tensión, se podría demostrar que poner en cabeza de Colpensiones dicha responsabilidad, tiene un impacto más lesivo para la sostenibilidad financiera del sistema, evaluando diferentes variables, tales como: (i) que Colpensiones es la única administradora del RPM, que alberga una mayor número de pensionados cuyas pensiones se reconocen con subsidio de las arcas del Estado, de forma tal, que se estaría solventado con estos recursos, el desmedro económico ocasionado por particulares (AFP). se debe evaluar por los jueces la proporcionalidad de la medida que se adopta con la ineficacia del traslado, y ponderar los bienes jurídicos en tensión, para adoptar otra medida, consistente en que sea la AFP quien asuma las cargas económica, o que los dineros que se trasladen al RAIS, los devuelva conforme a un estudio actuarial que determine que con ellos se cubre en su integridad la prestación en los términos actuariales previstos para el RPM.

**FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA POR PARTE DE COLPENSIONES.** Se fundamenta la presente excepción en el principio legal de la relatividad jurídica o de los contratos, en virtud

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

del cual Colpensiones es un tercero frente al negocio o vínculo contractual contraído entre la parte demandante y las Administradoras de Fondos Pensionales de carácter privado, por lo que, tal acto jurídico solo tiene efectos inter partes y con ello, independientemente de la decisión adoptada por el juez, Colpensiones no puede ser favorecida ni perjudicada con la decisión adoptada. Finalmente, frente al caso que nos atañe, ha de hacerse hincapié frente al agravio injustificado que padecería el equilibrio financiero del Sistema Pensional de ser procedente la nulidad de traslado y la obligatoriedad para Colpensiones de recibir al afiliado y sus aportes.

Es esa postura anterior, la que permite aseverar la no ocurrencia o asignación de consolidar la LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA en el presente litigio, por cuanto las pretensiones van incoadas a establecer un vicio del consentimiento que genere EL FONDO PRIVADO, sin tener Colpensiones asignación de responsabilidad alguna en la controversia planteada y lo cual permite darle trascendencia a teorías jurisprudenciales que en síntesis permite conceptualizarlo en la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado.

De esa aseveración deben extraerse elementos cualitativos que permitan la demostración de la subrogación de una legitimación en la causa por pasiva, lo cual para el caso no hace merecedor a COLPENSIONES de dicha asignación, por cuanto el derecho o vicio reclamado recae exclusivamente en el FONDO PRIVADO y es este solamente quien debe subsanarlo o satisfacer el adecuado restablecimiento del derecho violentado, DEJANDO POR FUERA DE TODA LA RELACION JURIDICA ORIGINADA PRINCIPALMENTE POR EL LITIGIO PLANTEADO a COLPENSIONES que nada tiene que ver con el vicio del consentimiento planteado por la parte actora, más aun, cuando la demandante ya ostenta la edad de pensión y quien debe generar la prestación económica es el FONDO PRIVADO y no COLPENSIONES lo cual permite aseverar de mejor forma la ausencia de la LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA de nuestra entidad

**DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES - ART. 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 1 DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005.** En desarrollo de los fines esenciales del Estado Colombiano, las instituciones que lo conforman deben propender hacia la salvaguarda de los principios y valores constitucionales conforme a lo dispuesto en la Carta Política, la Ley y los Convenios Internacionales suscritos por aquel.

El Artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, señala:

*“El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.” (Cursiva, Negrilla y Subrayado fuera del texto original)”*

Por consiguiente, el artículo 48 de la Constitución Política, estableció dos dimensiones de la seguridad social; por un lado, la concibió como un derecho constitucional fundamental; y, por el otro, como un servicio público de carácter obligatorio el cual se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en aras a la materialización de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, entre otros.

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

El artículo 334 de la Constitución Política, señala que “La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”, en ese orden de ideas, es necesario que, dando prevalencia al interés general sobre el particular, se tomen las medidas pertinentes en búsqueda de la protección de los recursos que soportan el sistema pensional, conforme a los principios que rigen la Constitución Política, en la medida que el derecho a la seguridad social se encuentra atado al principio de sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera del Estado.

En consecuencia, la declaración injustificada de ineficacia del traslado de un afiliado del RPM a RAIS afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

Así lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia T-489 de 2010 donde señaló:

*Existe plena libertad para que los afiliados se inscriban en cualquiera de los dos regímenes y para trasladarse del uno al otro. La única restricción acatada por la jurisprudencia constitucional, que se desprende del artículo 48 de la Constitución Nacional en el cual está sólidamente afincada, obliga al Estado a “garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional”. En virtud de esta disposición se explica la presencia de los incisos 4º y 5º del artículo 36 cuando establecen como excepción que: “Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen. Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida. Restricción que, como se vio, persigue evitar el detrimento económico a que, en particular, se ve sujeto el régimen de prima media. En este contexto económico financiero la Sala rescata y apoya las medidas de orden legal avaladas por la Corte Constitucional para garantizar la solidez financiera del sistema pensional como son: El cumplimiento en un 75% de las cotizaciones, hasta completar los 15 años. La posibilidad de retornar al régimen de Prima Media con Prestación Definida, pero con la obligación de llevar a él la totalidad del ahorro realizado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), sin que este ahorro sea inferior al que e hubiera alcanzado al permanecer en el de Prima Media con Prestación Definida. La prohibición de cambiarse de régimen para personas a quienes les falten diez (10) años o menos para alcanzar la edad de pensión de vejez. La obligación de permanecer en el régimen que se escoja, durante cinco (5) años y no tres (3), como lo autorizaba el artículo 13 de la Ley 100, antes de cambiarse de régimen, por una sola vez. (Ley 797-03, art. 2º).*

(...)

*Además, en estas condiciones por razones de equidad, para que no se beneficie de un fondo constituido por aportes de otras personas, y al cual ella misma no ha aportado la totalidad de las cotizaciones requeridas, entonces, se le negará su traslado al mismo. Pero especialmente se encuentra esta Sala de la Corte ante las serias motivaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional (sentencias C-1024-04 y C-789-02), asentadas sobre la sólida base del inciso 7º del artículo 48 de la Carta Suprema donde se ordena al Estado*

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8



# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

*“garantizar...la sostenibilidad financiera del sistema pensional...”. Motivaciones que se verían afectadas, si se concediera a la actora, contrariando elementales criterios de equidad, su traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS - al de Prima Media con Prestación Definida.” (Subrayado y negrilla fuera de texto original)*

En Sentencia de unificación SU130/13, la Corte se ocupó del tratamiento dado por la jurisprudencia constitucional a la problemática que surge en torno a quienes se trasladaron al régimen de ahorro individual y unificó su jurisprudencia advirtiendo que, de conformidad con lo previsto en los artículos 13, literal e) y 36, incisos 4° y 5° de la Ley 100 de 1993, tal y como fueron interpretados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse *“en cualquier tiempo”* del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición.

En esta misma línea se pronuncia la Corte Constitucional en sentencia T- 489 de 2010, al expresar: *“(...) la Sala se permite destacar dos ideas, relacionadas ambas con la sostenibilidad económica del sistema pensional. Ellas son: a-- La primera tiene que ver con la protección del capital pensional. No se puede permitir “la descapitalización del fondo”, si personas que no contribuyeron a su formación, vienen a último momento, cuando les faltan ya menos de 10 años para concretar su pensión de vejez, a beneficiarse de un ahorro comunitario accediendo a una pensión, cuyo pago desfinancia el sistema. b- En segundo término, desde una perspectiva social se contraría la equidad y se abandona el valor de la justicia material, al permitir a personas que no han contribuido a los rendimientos de los fondos pensionales, entren a beneficiarse y a subsidiarse a costa de las cotizaciones y los riesgos asumidos por otras y no por ellas mismas” (Subrayado y negrilla fuera de texto original).*

Debe resaltarse la importancia que en este tema concede la Corte Constitucional a las consecuencias económicas de las diferentes posiciones sobre la sostenibilidad financiera del Sistema.

Así las cosas el principio de sostenibilidad financiera representa la garantía del derecho fundamental a la pensión de los Colombianos de manera sostenida e indefinida y la posición asumida por la Corte en los fallos relacionados con nulidad o inexistencia del traslado entre regímenes pensionales, quebranta el principio de sostenibilidad financiera, en tanto genera una situación caótica que desvertebra la debida planeación en la asignación y distribución de los recursos del Sistema Pensional, al desconocer la irreductible necesidad de que dichas condenas se cumplan previa la ordenada gestión de los recursos que en la mayoría de los casos no están presupuestados en la medida en que surgen, de manera contingente de la declaración judicial respectiva.

La estabilidad financiera se garantiza en la medida en que el sistema general de pensiones percibe y mantiene, a través de medios jurídicos y financieros, los fondos económicos adecuados que le permitan pagar mes a mes a una mayor cantidad de pensionados y obtener un ahorro para precaver la satisfacción de las pensiones futuras, bajo la permanente orientación de subsanar con urgencia cualquier desventaja contra el bienestar general.

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8



# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

**PRESCRIPCIÓN.** De conformidad con el Artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo, que expresa “El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente.”, y a su vez, el Artículo 151 del Código Procesal Laboral, que consigna “Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.”

**BUENA FE.** Teniendo en cuenta que COLPENSIONES, como entidad pública debe dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente, y desarrollo al principio de legalidad, ha actuado conforme a los principios de buena fe, siempre ha efectuado del estudio de las solicitudes presentadas por la demandante respecto del reconocimiento del derecho pensional, ello conforme a lo legalmente aportado.

**GENÉRICA.** Respetuosamente solicito sean decretadas, todas aquellas excepciones cuyos presupuestos, de hecho y de derecho, llegaren a evidenciarse en el curso del proceso, siempre que permitan, negar de manera parcial o total las pretensiones de la demanda.

### I. PRUEBAS

Solicito al Señor Juez se tenga como tales las siguientes\_

#### DOCUMENTALES

**PRIMERA:** Que se tengan como pruebas los documentos anexos al escrito de demanda, y en cuanto a su valor probatorio.

**SEGUNDA:** Aporto en un archivo ZIP el expediente administrativo de la demandante

#### INTERROGATORIO

**PRIMERA.** Interrogatorio de parte de la señora MARÍA CLAUDIA RUIZ DURAN

### II. OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS

Muy comedidamente me permito solicitar, que en el hipotético caso de accederse a las pretensiones traídas al presente tramite y de imponerse obligación alguna de hacer a cargo de Colpensiones, esta deberá estar sujeta a condición, previo a que:

- La AFP normalice la afiliación en el Sistema de Información de Administradoras de Fondos de Pensiones – SIAFP (anulación a través de Mantis).

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

NIT No. 901.761.709-8

# UNION TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA

## COLPENSIONES 2023

- La devolución de sus aportes a Colpensiones, con la respectiva entrega del archivo de aportes realizados durante su permanencia en el Régimen de ahorro individual con Solidaridad – RAIS.

### I. ANEXOS

Los documentos anexos a la presente demanda son,

- Los documentos relacionados en el acápite de pruebas

### II. NOTIFICACIONES

Al demandado al correo: [notificaciones.mauricioeroa@gmail.com](mailto:notificaciones.mauricioeroa@gmail.com) y al correo: [zuleidyvalenciaabogada@outlook.es](mailto:zuleidyvalenciaabogada@outlook.es)

Atentamente,

**IVETH ZULEIDY VALENCIA MONTEALEGRE**  
C.C No. 1.110.571.948 de Ibagué  
T.P. No. 33.97.48 de C.S. de la J.

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314  
Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real  
NIT No. 901.761.709-8